

trito del Estado.—*Lia. Luis I. Gomez.*—
De asistencia.—*José Maria Gonzalez.*—
Vicente Simancas.

Es copia que certifico. H. Veracruz, 6
de Octubre de 1873.—*José M. de Manero*
y Umbides.

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Noviembre 24 de 1873.—Visto
el recurso de amparo promovido ante el
Juez de Distrito del Estado de Veracruz
por Apolinario Tinoco, quejándose de que
se ha violado en su persona la garantía con-
signada en el artículo 14 constitucional, al
ser juzgado por el Gefe político de Córdo-
va como saltador y condenado á la pena
capital, que le fué conmutada por el Eje-
cutivo del Estado en la de diez años de pre-
sidio con retonces en San Juan de Ulúa.

Vista la sentencia del Juez de Distrito,
que de conformidad con el parecer fiscal,
negó el amparo pedido; y considerando que
de las constancias de autos aparece compro-
bado, que Apolinario Tinoco es reo de ho-
micidio con las circunstancias agravantes
que exige la ley, para la suspension de las
garantías individuales, y en consecuencia,
la autoridad política ha procedido con ar-
reglo á las leyes de 23 de Mayo de 1872, y
3 de Mayo último; al conocer de la causa
que se instruyó al quejoso, y tales procedi-
mientos no constituyen violación en su per-
sona de la garantía á que se refiere el ar-
tículo constitucional que se alega.

Por lo expuesto, y con fundamento de
la ley de 20 de Enero de 1869, se resuel-
ve lo siguiente: Se confirma la sentencia
pronunciada en la ciudad de Veracruz á
25 de Setiembre último por el Juez de Dis-
trito, declarando: que la Justicia de la Union
no ampara ni protege á Apolinario Tinoco,
contra los procedimientos del Gefe político
de Córdoba que se reclaman.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de

Distrito que las elevó á revision, acompa-
ñándole testimonio de esta sentencia para
los efectos consiguientes; publíquese por los
periódicos, y archívese á su vez el Toca-

Así por unanimidad de votos lo decreta-
ron los CC. Presidente y Magistrados que
formaron el Tribunal pleno de la Corte Su-
prema de Justicia de los Estados Unidos Me-
xicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—
Pedro Ogazon.—*Juan J. de la Garza.*—
José M. Lozano.—*José Arteaga.*—*Ignacio*
Ramirez.—*M. de Castañeda y Nájera.*—
J. M. del Castillo Velasco.—*M. Au-*
za.—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Za-*
valla.—*José Garcia Ramirez.*—*Enrique Lan-*
da, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciem-
bre 2 de 1873.—*Lia. Emilio Ordáz,* ofi-
cial mayor.

AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito
de Jalisco por el presbítero D. Fran-
cisco Rodriguez, contra la ocupacion
por una fuerza de artillería y de ór-
den del General Junguito, de la par-
te del convento de San Francisco, que
le servia de habitacion.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez,

El Promotor fiscal dice: El C. Francisco
Rodriguez reclama el amparo de la Justicia
federal, contra el C. General Rafael Jun-
guito, manifestando: que es capellan del
templo de San Francisco en esta ciudad,
segun consta por la comunicacion que acom-
paña; que como tal capellan estaba en po-
sesion no solo del templo mencionado, abier-
to al culto católico con permiso de la auto-
ridad, sino tambien de la sacristía, camarín
y una parte del convento, que conforme al
artículo 11 de la ley de 12 de Julio de 1859,

el Gobierno del Estado entregó á los Señores Gobernadores de la Mitra el 14 de Abril de 1862; que esa posesion, fundada en el título legítimo referido, no alterada desde la fecha dicha, ha sido bruscamente interrumpida por órden expresa del C. General Junguito, practicándose una horadacion por donde penetraron soldados de artillería y consumaron el despojo, no solo de la parte del ex-convento de San Francisco adherida y entregada como anexa al templo, sino de la sacristía y demas anexidades, levantando tapias en las puertas para impedir la entrada del exterior; y que tales actos abusivos han sido ejecutados sin órden de autoridad competente, por no serlo para el caso la militar que ejerce el C. General Junguito, contra la determinacion del Juez 1º de lo civil, que trató de evitarlos á causa del interdicto de obra nueva ante él entablado, y en contra tambien de la policia y del Gobierno del Estado que exigieron el cumplimiento de aquella determinacion, siendo por lo mismo, violentamente atacadas las garantías consignadas en los artículos 16, 17 y 27 de la Constitucion federal, y procedente, como remedio legal, el amparo pedido.

El C. General Junguito ha informado negando los hechos referidos por el Presbítero Rodriguez, y asegurando que este entregó la parte del ex-convento, que indebidamente poseía, sin sufrir violencia ni molestias de ninguna clase, á causa de la comunicacion que acompaña bajo el número 9, y segun consta por el número 16.

Cree el Promotor indispensable, que el Juzgado averigüe la verdad de los hechos, recibiendo el negocio á prueba y practicando una vista ocular en el edificio sobre que versa la cuestion, á fin de que pueda resolver en justicia; y si de los justificantes que se rindan resulta demostrado, que el Presbítero Rodriguez era poseedor legítimo de la sacristía y una parte del ex-convento de San Francisco, por haber sido entregados como anexidades al templo, conforme á la

ley y por la autoridad competente, á los Gobernadores de la Mitra, y que ha sido despojado de esas posesiones por actos arbitrarios y violentos de la autoridad militar; como bajo ese supuesto han sido positivamente atacadas las garantías que consignan los artículos 16, 17 y 27 de la Constitucion federal.

El suscrito pide: que en tal evento, la Justicia de la Union ampara y protege al Presbítero Francisco Rodriguez, contra los actos de despojo mandados ejecutar por órden del General Rafael Junguito, previniendo á este, restituya al primero de las posesiones de que ha sido privado. Guadalajara, Setiembre 8 de 1873.—Firmado. —A. Camarena.

Es copia. Guadalajara, Setiembre 8 de 1873.—A. Camarena.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guadalajara, Octubre 10 de 1873.—Vistos.—El Presbítero D. Francisco Rodriguez, capellan del templo de San Francisco de esta ciudad, entabló ante este Juzgado juicio de amparo y proteccion de garantías contra el General Rafael Junguito, comandante militar de las fuerzas que guardan esta plaza, exponiendo: que con fecha 14 de Abril de 1862, el Gobierno del Estado, en cumplimiento del artículo 11 de la ley de 12 de Julio de 1859, mandó abrir al culto católico el referido templo y se le entregó para ese efecto á los Señores Gobernadores de la Mitra, juntamente con la sacristía, camarín y otra parte de ex-convento del mismo nombre; que desde aquella fecha el capellan del templo estuvo en pacífica posesion de todo el edificio cedido al Gobierno eclesiástico; hasta el 21 de Agosto próximo pasado que unos soldados de artillería empezaron á destruir una pared que separaba el local que se va á destinar para cuartel de la misma artillería, de la parte del convento que ocupa el capellan:

que para impedir tal procedimiento, entabló ante el Juez 1º de lo civil de esta capital, interdicto de obra nueva, y aunque obtuvo sentencia favorable, el General Junguito no la obedeció, ni á la autoridad que iba á sostener la providencia: que por tales actos cree, que dicho General ha violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 16, 17 y 27 de la Constitución general. Pidió también suspensión del acto reclamado, que no tuvo efecto por estar consumado.

Pedido informe al C. General Junguito, lo evacuó acompañando 16 copias de oficio, la mayor parte inconducentes, pues solo ven al cambio de cuartel que tuvo la 4ª Brigada de artillería, á que el convento es de la Nación, y que el Presbítero Rodríguez no tiene ningún derecho, porque aun se niega que la iglesia esté abierta para el culto católico con autorización del Supremo Gobierno.

Recibido el negocio á prueba, el Presbítero D. Francisco Rodríguez promovió las que le convino para justificar la posesión en que ha estado de la parte del convento que se le dejó para el servicio del capellan, y de la sacristía anexa á la iglesia y necesaria para el culto; al efecto declararon seis testigos, de conformidad sobre los puntos interrogados; se practicó vista de ojos, y se nombró un perito para que designara de una manera clara la parte en que el capellan había sido despojado; además se pidió informe al Gobierno del Estado, sobre la concesión del templo de San Francisco para el culto católico, y de todo resulta.

Primero: que el General Junguito arbitrariamente despojó al capellan de la iglesia de San Francisco, de una parte que se le había dejado para que la ocupara como capellan, como se ha dejado en todos los conventos, considerando necesario para habitación de los que tienen necesidad de atenderlo.

Segundo: que el General Junguito se extendió á ocupar pieza que las sacristías no

se han considerado como de habitación, sino anexas á los templos, y

Tercero: que la grande extensión del convento de San Francisco, en donde varias veces ha habido aun para dos cuarteles de infantería ó caballería y en alta fuerza, no puede justificar el General Junguito, que por necesidad haya ocupado la sacristía y la parte del convento concedida al capellan.

Por tales fundamentos, y apoyado este Juzgado en la ley de 20 de Enero de 1869, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, falla con las proposiciones siguientes:

Primera: la Justicia de la Unión ampara y protege al Presbítero D. Francisco Rodríguez, contra los actos de despojo mandado ejecutar por el C. General Rafael Junguito, quien repondrá las cosas al estado que tenían el día 21 del mes próximo pasado Agosto.

Segunda: notifíquese esta sentencia; publíquese en el periódico oficial del Estado, y remítase este expediente á la Corte Suprema de Justicia, para los fines de la ley. El Juez de Distrito lo sentenció y firmó.—Firmados.—D. I. Trejo.—G. J. Gallegos.

Es copia. Guadalajara, Octubre 14 de 1873.—G. J. Gallegos.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 13 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco, por D. Francisco Rodríguez, como capellan del templo de San Francisco en Guadalajara, contra el despojo que ha sufrido de órden del Comandante militar de la plaza, C. General Rafael Junguito, de la parte del convento anexa á esa iglesia que le sirve de habitación, y de la cual estaba en quieta y pacífica posesión el clero católico, desde el año de 1862, en que se permitió abrir al culto el referido templo, exponiendo además, que

á pesar de haber obtenido sentencia favorable en el interdicto de obra nueva que entabló ante el Juzgado 1º del ramo civil de Guadalajara, contra las obras que se emprendieron para impedir el uso de la parte de convento que ocupaba; el General Junguito ha persistido en continuar las obras, negándose á obedecer el fallo, cuyos procedimientos constituyen en concepto del quejoso, una violación de las garantías que otorgan los artículos 16, 17 y 27 de la carta fundamental de la República.

Considerando: que por el artículo 27 de la Constitución federal, ninguna corporación eclesiástica tiene capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al culto.

Que por lo mismo, el Presbítero D. Francisco Rodríguez, como representante del clero, ha ocupado la parte del convento que reclama sin título alguno, para el cual pueda considerársele como propietario, como administrador ni como poseedor.

Que para esa propiedad ó posesión, tampoco puede alegar títulos personales, supuesto que no aparece como comprador, ni como adjudicatario.

Que en consecuencia, habiendo pasado el convento de San Francisco de Guadalajara, al dominio de la nación, sin su consentimiento ninguna persona puede habitarlo.

Que los procedimientos del General Junguito, podrán motivar una responsabilidad para cuya reclamación tiene á salvo sus derechos el agraviado; pero de ninguna manera alteran los derechos de propiedad que posee la Nación.

Que por tales consideraciones, aparece que no ha habido violación de garantías en la persona del Presbítero D. Francisco Rodríguez.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta. Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Dis-

trito de Jalisco en 10 de Octubre del presente año, que declaró haber lugar al amparo federal. Segundo: la Justicia de la Unión no ampara ni protege al Presbítero D. Francisco Rodríguez, contra la ocupación por una fuerza de artillería, y de órden del General Junguito, de la parte del convento de San Francisco que le servía de habitación.

Devuélvanse la actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Lanza*, secretario.

Es copia. México, Enero 7 de 1873.
Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por el C. Ramon Irigoyen, contra el C. Gefe político del Distrito de Iturbide, por violación de garantías.

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El encargado interinamente de la Gerencia de Hacienda del Estado, cumpliendo con la ley que le impone el deber de llevar la voz fiscal por impedimento del C. Promotor, dice: que en su opinión, no es de accederse á la solicitud que hace el C. Ramon Irigoyen en su anterior ocurno, en que pide se abra á prueba este negocio, en atención á las razones que paso á exponer: El artícu-